

dó practicar, obligando á dichos comerciantes al pago de la contribucion establecida sobre el aguardiente y la azucar, por el decreto número 66 del Estado, la cual dicen los quejosos que es una alcabala, y como tal, un impuesto contrario á lo prevenido en el art. 124 de la Constitucion federal, y en su cobro y apremio para su pago, una violacion de la garantía de la propiedad, otorgada por ese código: Visto el informe de la autoridad responsable; las pruebas presentadas por la parte promotora; las recibidas á solicitud del Promotor fiscal; lo alegado por la primera; lo pedido por el segundo; y la sentencia del Juez de Distrito, con todo lo demás que de autos consta y ver convino. Considerando: que el art. 124 de la Constitucion federal, que prescribió la abolicion de las alcabalas y aduanas interiores de la República, supone como condicion natural el previo establecimiento de los impuestos necesarios para organizar la hacienda pública, remplazando las alcabalas, y la expedicion de la ley ó leyes indispensables para hacer efectiva la prevencion constitucional, la cual en consecuencia no puede considerarse violada mientras no se llenen esas condiciones. Por lo expuesto, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del referido Juez de Distrito de Veracruz, pronunciada en 18 de Mayo último, solamente en la parte que dice: "La Justicia de la Union no ampara ni protege á los Sres. Volazco Hermanos contra las providencias y actos de la Administracion principal de rentas de esta capital, en virtud de los cuales les apremia y estrecha al pago de los impuestos señalados en el decreto num. 66, expedido por la H. Legislatura del Estado en 21 de Diciembre próximo pasado."

Devuelvanse sus actuaciones al repetido Juez de Distrito, con testimonio de este auto para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que

formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafraqua.*—*P. Ordáz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México Junio diez de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

CIVIL.

Autos promovidos ante el Juzgado de Distrito de Puebla por las Sras Monterde y D. Manuel Riquelme, deduciendo derechos á los bienes de la ex-religiosa sor Blasina de San Antonio.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor dice: que á virtud de las leyes que nacionalizaron los bienes que manejaba el clero, se presentaron las Sras. D^a Dolores y D^a María de Jesus Monterde, por medio de su apoderado D. Agapito Fernandez, haciendo igual presentacion D. Rafael Riquelme, por sí y á nombre de sus hermanos, D. Luis y D. José, todos deduciendo derecho á los bienes que en su testamento dejara sor Blasa Josefa de San Antonio, religiosa que fué del convento de Santa Clara de esta ciudad; por cuanto á que dichos bienes deben pasar en su concepto, á los parientes consanguíneos de la monja, por no haber tenido efecto las disposiciones piadosas que en dicho testamento se previenen, y por cuya causa no deben entrar al dominio de la nacion.

En este estado se pasaron los autos al suscrito para que pidiese lo que tuviese por oportuno á su representacion, por lo que el que habla fué de sentir en su pedimento de

8 de Junio, que antes de entrar en la cuestion de ver si existen los bienes que se solicitan, si no se han consumido ó menoscabado, si podian ó no darse á los pretendientes, y para lo que á su vez fundarian sus derechos, justificarian previamente su entroncamiento con la testadora, por ser indudable que ninguna accion tendrian á reclamar esos bienes si no probaban satisfactoriamente su parentesco.

Conforme el Juzgado y los interesados con esta opinion, se mandó por auto de 13 de Junio, se abriese este negocio á prueba por veinte dias, que á peticion del Sr. Riquelme se prorogaron por sesenta. Durante este término han rendido los interesados las justificaciones que los han parecido suficientes, las que el suscrito pasa á examinar, para ver si llenan ó no el objeto que se han propuesto.

La parte de las Sras. Monterde solo ha limitado su prueba á la exhibicion de un árbol genealógico de los descendientes de D. Luis Monterde y Antillon, casado con D^a Catalina Lazo Nacarino, el que está fielmente certificado de los autos seguidos contra D. Lorenzo Catalan, D. Francisco Collado y D^a Luisa Picazo, sobre pertenencia de bienes, por el escribano D. Hilario Lárrega, de la tercera sala de la audiencia territorial de Zaragoza en el reino de España. Este árbol genealógico obia por principio de una real provision, solicitada por el referido Collado, como apoderado de D. Francisco Monterde y Camer, para que en la ciudad de México se practicasen algunas diligencias, reducidas al exámen de algunos testigos para comprobar el parentesco ó entroncamiento de las personas que refiere tal árbol; así como de los libros respectivos de las parroquias de esa ciudad, se compulsarán las partidas de matrimonio de D. Luis Monterde y Antillon con D^a Catalina Lazo Nacarino, las de bautismo y matrimonio de su hijo D. Luis, que casó con D^a María Pinal; la de bautismo y matrimonio de D. Rafael Monterde y Pinal,

que casó con D^a Micaela Monterde; la de bautismo de ésta; la de sus dos hijos, D. Manuel y D. Ignacio, y la partida de entronco de éste. Por conclusion pedia, se compulsaran de un libro existente en poder de la familia de los Monterde, el testimonio de su genealogía y la cláusula de fundacion del vínculo de D. Sancho Monterde.

Esta real provision, que viene legalizada en forma por las autoridades de ese reino, y tambien por la legacion mexicana allí establecida, no ha sido desahogada aún, á pesar de haberse remitido desde el año de 1843, ó tal vez lo fué alguna otra de las copias que para evitar un extravío se remitieran; pero el hecho es que en esta que se ha exhibido, ni se examinaron los testigos al tenor del interrogatorio que se incluye, ni se compulsaron las partidas necesarias para justificar el entroncamiento, ni menos se compulsó la cláusula respectiva del libro de los Monterde, sobre la fundacion del vínculo de D. Sancho. Y aunque se han agregado á esa provision tres partidas, una de casamiento de D. Francisco Monterde con D^a Isabel Tirado; otra de bautismo de D^a María Dolores Guadalupe Josefa, y otra de D^a María de la Concepcion Josefa Anastacia, las dos hijas de los anteriores, estas únicas partidas están muy distantes de comprobar, no solo el entroncamiento de las Sras. D^a Dolores y D^a María de Jesus Monterde con la religiosa sor Blasa de San Antonio; pero ni aun siquiera justifican de algun modo su parentesco con D. Luis Monterde y Antillon, casado con D^a Catalina Lazo Nacarino, que son los que encabezan el árbol genealógico referido.

De aquí resulta, que no practicadas las diligencias que se pedian en la real provision, ésta nada vale, carece de fuerza legal, y no prueba el parentesco que se pretendia por las interesadas que la presentaron.

Pasando al exámen de las pruebas aducidas por los Sres. Riquelme, el juzgado observará, que para justificar su entroncamiento con la monja testadora, se han re-

ferido á las pruebas que de antemano tenían rendidas en los autos de la capellanía fundada por dicha monja con el principal de tres mil pesos, exhibiendo hoy únicamente las partidas de bautismo de los siete hijos de D. Rafael y D^a Guadalupe Neve para entroncarlos también con la testadora. Mas aunque la posesion que ha tenido el hijo de D. Rafael Riquelme de esta capellanía, así como sus demás parientes, indica tener justificada esa familia el entroncamiento que hoy pretende justificar, sin embargo, de los mismos autos consta, que la posesion de ese beneficio la han llegado á disfrutar por una mera gracia, esto es, por la dispensa que se les ha otorgado de la presentacion respectiva de la partida de D^a Ignacia Rodriguez de Vargas, que siempre se ha juzgado indispensable para entroncarlos con la fundadora; gracia que en diversas épocas se les concedió por las dificultades que se pulsaron para su presentacion, y que aun ahora les hubiera servido de grande utilidad, si no hubieran tenido el candor de presentar la partida que por las razones allí expuestas se hacia tan sospechosa. Esta sospecha quedó confirmada con la vista de ojos practicada por este Juzgado á petición del representante de los Sras. Monterde, la que puso de manifiesto la falsedad de dicha partida, así como que con ese fraude, (sobre lo que dejo á salvo los derechos de la vindicta pública), hubieran logrado su intento sin la precaucion que se tomó; y la cual obligó á Riquelme á exhibir otra partida de la misma D^a Ignacia. Pero además de que por las razones que en autos constan, ya no era tiempo de recibir nuevas pruebas, esta segunda envuelve las mismas sospechas que la anterior, cuando los interesados han dudado de su autenticidad y validez, por lo que ninguna fé ni crédito puede dársele en ese estado.

Pudiera acaso decirse que el parentesco de D^a Ignacia Rodriguez de Vargas con D. Nicolás del mismo apellido, está comprobado con las declaraciones de los testigos de

fojas 73, 74 y 75, (cuaderno de la capellanía); pero es de advertirse, que dichos testigos, sobre este particular no declaran de ciencia cierta sino de oídas; razon porque, á pesar de esto, se exigió dicha partida, y la que siempre que llegaba á dispensarse era solo por esa vez, sin que sirviese de ejemplar y sin perjuicio de tercero. Y si esto se decia cuando la petición se limitaba al usufructo del capital, ¿qué diremos ahora que por la conducta de los Riquelme, se duda de su buena fé, y mas tratándose de la propiedad de todos esos cuantiosos bienes, que segun el testamento, llegaban á cuarenta mil pesos?

Resulta de todo esto, que tampoco los Sres. Riquelme han justificado satisfactoriamente su parentesco: que por lo mismo, ni ellos ni las Sras. Monterde, tienen accion á pedir los bienes de la religiosa sor Blasina del convento de Santa Clara; y que habiendo estado esos bienes por muchos años bajo la administracion eclesiástica, deben entrar al dominio de la nacion.

Este es el parecer del suscrito, que sujeta á la ilustracion del Juzgado, quien si fuere de la misma opinion, se ha de servir mandar se comuniqué su resolucion á la Jefatura superior de Hacienda, para que disponga de esos bienes; previniendo igualmente al Sr. Riquelme, reponga el papel de que ha hecho uso con el del sello correspondiente, porque si él está ayudado por pobre, no está acreditada la insolvencia de sus hermanos por quienes ha representado.

Puebla, Diciembre diez de mil ochocientos sesenta y uno.—(Firmado).—*Lic. Sandoval*.

Sentencia del Juez de Distrito.

Puebla, Diciembre veinte de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos estos autos instruidos á solicitud de las Sras. D^a Dolores y D^a María de

Jesús Monterde, en persecucion del capital que entre los propios del monasterio de Sta. Clara de esta ciudad, ingresara de su peculio la R. M. Sor Blasina de San Antonio Religiosa de ese convento, y que por las leyes de nacionalizacion de bienes eclesiásticos pasasen al dominio de la Nacion; la tercería excluyente de Don Rafael Riquelme por sí y sus hermanos que se creyeron con mejor derecho para optar, á merced de su próxima consanguinidad con la fundadora, la desvinculacion y aplicacion de aquellos fondos, cuyo destino y calidad se dirán; los entroncamientos familiares con la dicha religiosa, que una y otra rama procuraron describir y acreditar cual les plugo, para apoyar sus vínculos y aspiraciones al caudal confundido con el comun del monasterio, y llevarse la preferencia en el debate de sucesion; el artículo verdaderamente grave suscitado contra la prueba de Riquelme por la partida de bautismo de D^a Ignacia Josefa de Guadalupe Rodriguez de Vargas y Benitez, que como su enunciada abuela, forma un eslabon esencialísimo de la cadena genealógica, y su encuentro ha sufrido célebres peripecias; los alegatos de una y otra parte así en lo principal como sobre aquella influente incidencia; las medidas dictadas de oficio y á promocion de parte, para el esclarecimiento fiscal en ambos puntos, como de trascendencia vital para los intereses Nacionales cuya defensa está encomendada á su ministerio, con todos los demás datos y fundamentos que han debido verse y tenerse presente para resolver este negocio: cierto como lo es á semejante intento, que ante todo otro capítulo fundamental, ha sido y es de clasificarse la institucion que con su peculio paterno y materno quiso hacer para despues de sus dias la susodicha Sor Blasina de San Antonio, por que de ella depende saber si han ó no accion á desvincular y percibir el capital sus parientes consanguíneos con mas ó menos preferencia, segun las diversas cualidades prolativas que en los mayoraz-

gos y otras vinculaciones laicas se hacian lugar: que para esto no hay ni puede haber regla y antorcha mas segura, que sus dos testamentos, otorgados el uno para profesar y el otro aclaratorio de ese, y mas preciso y particularizado despues de profesar: que en uno y otro se descubre á solo un golpe de ojo el caracter eclesiástico que quiso dar á todas sus fundaciones, puesto que la legítima paterna la destinó al culto del augusto sacramento de la Eucaristía, en las misas de Renovacion y Jubileo circular de su convento; y con los réditos de la materna ordenó que segun su cuantía fructuosa se fueran erigiendo capellanías colativas, con cargo de misas y dotes para religiosas, algunas con oficio anexo en bien del monasterio: que si en todo eso patentiza un deseo de auxiliar á sus parientes pobres de preferencia, fué á condicion del sacerdocio y la clausura; de suerte, que á falta de una ú otra vocacion, ni hombres ni mugeres lograrían cosa alguna de provecho, y aun de estas, las que con algo de patrimonio contarán, eso menos llevarían, aun para el caso de aspirar al mongío: que en su defecto, habrían de gozar tales beneficios gentes extrañas, á juicio de la R. M. Abadesa en quien se fijó el patronato de tales obras pias, (en la asepcion neta y canónica de la palabra) bajo ciertas restricciones, pero siempre consultando la perpetuidad ó inversion fija de las fundaciones: que de hecho y partiendo de ellas, las dotes se han de haber invertido y aplicado á distintas religiosas y las capellanías servido en su rigor eclesiástico: que así por esos precedentes y su objeto y calidad, como por la administracion y procuracion de los capitales, no pueden dejar de estar comprendidas todas esas instituciones en los bienes que por su naturaleza de eclesiásticos pasaron al dominio de la nacion, conforme á las leyes de 12 y 13 de Julio de 1859 y reglamento de 5 de Febrero del espirante año; teniendo en cuenta, además de esos inconvenientes primitivos y radicales de la institucion,

que aun sin ellos y suponiéndola laica, concretada á la estirpe de la fundadora y desvinculables, segun la ley de las cortes de España y sus concordantes de México, ni las Monterde ni Riquelme han probado su parentesco en el orden legal, como observa y muy bien el Promotor fiscal; por que la ejecutoria de las unas es incompleta é insuficiente, y al otro le ha faltado el enlace con la que apellida su abuela, incurriendo en falsedades notorias y reprobables, por querer llenar ese vacío que en mas de cuarenta años no ha podido cubrir con la partida parroquial del bautismo de esa señora; pues que la del curato de San Marcos ni carece de sospechosa enmendadura, ni fué presentada en tiempo, no obstante que la sacara desde 13 de Setiembre, dejando controvertir y depurar la muy monstruosa del Sagrario, plagada de vicios en su original y en pugna escandalosa con la otra, de que no solo resulta la nulidad de ambas como lo enseñan los maestros de la ciencia, sino conjeturas gravísimas de un crimen digno de averiguarse y castigarse por la dualidad de sus miras y consecuencias trascendentales; de estricta justicia viene en declarar, como realmente se declara por esta sentencia definitiva: que no han lugar en derecho las pretensiones de uno y otro colitigante respecto de las legítimas de sor Blasina de San Antonio, distribuidas por su voluntad postrimera en favor de varias disposiciones piadosas con que quiso servir al culto católico en su monasterio, y á su alma y la de sus parientes, de una manera perpétua é irrevocable.

Hágase saber y comuníquese á la Gefatura Superior de Hacienda para su conocimiento. El C. Lic. José Rafael Isunza Juez interino de Distrito, así lo determinó y firmó por ante mí el suscrito actuario de que doy fé. (firmados).—*José Rafael Isunza*.—*José M. Tello*.

Pedimento del C. Promotor de Circuito.

C. Magistrado de Circuito.

El Promotor fiscal pide á V. se sirva de clarar, que las familias Riquelme y Monterde, no tienen derecho alguno hereditario á los bienes de la testamentaria de la madre Sor. Blasina de San Antonio, antigua religiosa del convento de Sta. Clara, y que por lo mismo pertenecen esos bienes al dominio de la Nación, conforme á las leyes de 12 y 13 de Julio de 1859, y reglamento de 5 de Febrero de 1861.

Sobradas serian para fundar este pedimento, las sólidas razones alegadas por este ministerio, y corroboradas al adoptarlas en su sentencia el C. Juez de Distrito; pero á fin de que no ofrezca la menor duda la resolución de este juicio, y se patentice la justificación del Tribunal que V. dignamente preside, mas que cumplir con el objeto de este acto, expondré brevemente las razones y fundamentos del parecer que he emitido.

Las familias Riquelme y Monterde pretenden los bienes de sor Blasina, muerta á mediados del siglo pasado, con el carácter de herederas ab-intestato, y sin tener en cuenta el testamento otorgado por dicha señora religiosa.

El caso presente se ha examinado bajo su mas vulgar aspecto, sin fijarse en la circunstancia extraordinaria y rarísima del tiempo transcurrido entre la muerte de la testadora y las gestiones de los herederos, circunstancia de tal gravedad, que no vacilo en asegurar que por sí sola es bastante para resolver la cuestion, y no en favor de los que se llaman herederos.

Nuestra ley de sucesion previene terminantemente y como condicion precisa, que viva el heredero al tiempo de la muerte de la persona á quien trata de heredar. Este principio consignado antes de ahora en otras legislaciones, acaso no lo estaba tan explícitamente en la antigua española, pero es de

una verdad tan obvia y de una justicia tal que no puede dudarse de su existencia jurídica, aun antes de que la ley lo consignara como un principio legal. Todo acto humano, todo derecho, supone esencialmente la capacidad de obrar, la capacidad de obtener: toda acción, todo derecho supone la personalidad, y ésta supone la vida. Quien no existe no es persona, ni tiene estado á los ojos de la ley, ni puede ser objeto de sus prescripciones favorables ó adversas.

Sucede y sucederá muchas veces que hereden á una persona otras que no vivan al tiempo del fallecimiento de aquella, pero jamás por derecho propio, sino en virtud de habérselos transmitido los que por la ley lo tuvieron, verificándose de esta manera, que no por su propio derecho, sino por el transmitido, tuvieron parte en la sucesión. Así lo ha querido la ley. Los derechos y acciones, salvo alguna excepción casual, son transmisibles.

En el presente caso y hablándose de todos los bienes de la sucesión que se litigan, ningún derecho tuvieron á ellos los hermanos de la religiosa, y menos los tuvieron los sobrinos, de quienes debía derivarse á sus hijos, nietos y viznietos. ¿De dónde pues, lo toman éstos, siendo fuera de duda que por sí no lo tienen? Si los hermanos de la testadora, hubieran entablado un litigio en demanda de la herencia, cualquiera compend de el resultado desfavorable que hubieran obtenido, pues la disposición testamentaria estuvo perfectamente arreglada á la ley. ¿Cómo es posible que parientes tan remotos de aquellos tengan mejor derecho? ¿y no es un absurdo monstruoso, una antilogía incalificable, que el trascurso de un siglo pudiera convertir en derecho lo que no fué ni una sombra respecto de las personas de quienes se pretende tomar su origen?

Se hace valer como favorable á los litigantes, que no llegaron á cumplirse las imposiciones piadosas ordenadas en el testamento, estimando por esto la sucesión como una herencia yacente y en las condicio-

nes ordinarias de tal, sin pensar que mejor los estaría dadas por cumplidas moralmente y por esa razón y el parentesco, pretender los capitales designados para dotes y capellanías en virtud de la ley de desvinculaciones. No mejoraría por esto su derecho aun cuando tuviera mas viso de justicia. Pero cuando confiesan y es cierto, que no se cumplió con el testamento; cuando en virtud de éste, ninguna acción tienen á los bienes, y considerándolo nulo, no son ni han sido nunca herederos ab-intestato; su pretensión es tan infundada y ridícula como la de cualquiera otro vecino de esta ciudad que hubiera hecho las gestiones que ellos.

Las razones precedentes son de una verdad legal tan clara é irresistible, que por sí solas bastan para decidir la dificultad; no obstante, examinaré la cuestión bajo el aspecto que hasta ahora se ha considerado, pues si el derecho público la resuelve en contra de los litigantes, el civil no la favorece en lo más mínimo.

Desde luego, la familia Monterde quedó excluida de la herencia por voluntad expresa de la testadora, y pudo con arreglo á las leyes excluirla, cuando estas jamás les han dado á los parientes colaterales, la calidad de herederos forzosos. Valga ó no el testamento en cuanto á las fundaciones, el derecho de los herederos, únicamente podría tomarse de la intención que tuvo la testadora de favorecer hermanos, sobrinos y descendientes de éstos. Es tan cierto eso, que si á la posesión de los beneficios se hubieran llamado extraños, realizadas ó no las fundaciones pías; ni parientes ni extraños, hubieran disputado á la Nación el dominio de los bienes.

Aun prescindiendo de esa razón; la familia Monterde no ha probado su parentesco con la monja sor Blasina, y solo en el parentesco podría en último resultado, fundar su acción al intestado. Ha rendido pruebas con objeto de legalizar su genealogía y entroncamiento con un antiguo as-

cendiente de D. Luis Monterde y Antillon, y por vía de prueba, en el presente juicio, ha presentado un testimonio de aquellas diligencias. En él se refiere que D. Luis y D. Gerónimo son hermanos, y lo aseguran así tres testigos; pero la razón de su dicho la fundan en que de ese modo lo oyeron decir, y afirman que no conocen á esas personas. Tal testimonio por lo tanto, es defectuoso, y no está corroborado mas que con la circunstancia de la identidad del apellido.

Respecto de Riquelme, ha intentado probar que su abuela, D^a. Ignacia Rodriguez Benitez, era hija de D. Nicolás Rodriguez de Vargas, hermano de Sor Blasina; pero los medios de que se ha valido son tan reprobados, que mas que de una refutación, deberían ser objeto de una sumaria criminal.

Presentó en primera instancia una fé de bautismo sacada del curato de Catedral, y al confrontarla con la partida, se encontró con que ésta habia sido previamente alterada. En ella, «á primera vista se descubre multitud de enmendaduras hechas con torpeza y la mayor precipitación,» segun refiere la acta relativa asentada á fojas 80.

Por haberlo sido fuera de tiempo en la instancia, se presentó en segunda otra fé de bautismo, sacada de la parroquia de San Márcos, é igualmente viciosa que la anterior, segun se vió al practicar su confrontación con la partida original. En la acta que con motivo de esa diligencia se extendió (fojas treinta y cinco), consta, «que tanto en el cuerpo de la partida como en el registro marginal, la palabra *Ignacia* está suplantada, súcio el papel y todo eso hecho con la mayor violencia é imperfección.»

Es verdad que con posterioridad á la vista de ojos, dos peritos por ignorancia ó condescendencia, afirman lo contrario; pero fácilmente se comprende cuanta mas fé merezca el Juzgado de Distrito, que dos

maestros de escuela, y seria indocoroso para el ministerio que ejerzo y mas todavía al Tribunal, poner en parangon su testimonio con el de dos particulares, aun cuando fueran mas caracterizados los peritos que dos preceptores de primeras letras.

Bien comprendió el interesado, que debia ser altamente sospechosa la presentación de tal fé de bautismo, cuando la primera habia sido falsificada tan groseramente, y por eso la acompañó de circunstancias, que en su concepto podrian destruir esa sospecha; pero lejos de conseguir su intento, producen uno absolutamente contrario.

Refiere su hermano D. Luis, que casualmente encontró entre sus papeles, cinco cartas de D^a María Ignacia Cubilla, y con ellas una nota en que existian indicaciones de las fechas de la muerte y nacimiento de D^a Ignacia Rodriguez Benitez; y con el objeto de que se supiera en el Juzgado el modo extraordinario con que despues de tantos años de buscarla inútilmente se encontrara la partida de bautismo, remitió las cinco cartas y la nota al cura de San Márcos, encargándole las conservara en el archivo y no las entregara al Juez, sino mediante ciertas precauciones bastante raras é inútiles.

Todas ellas se hacen desde luego muy sospechosas, pues la verdad se revela por sí sola y no necesita para brillar de adornos extraños á ella misma; pero estas sospechas se convierten en certidumbre, no solo por la falsificación de la partida bautismal, sino por la de la nota atribuida á D^a Ignacia Cubilla y la increíble aserción de que accidentalmente se encontrara y subiera previsto eso acaso con tanta seguridad, que se buscaran testigos que presenciaron el hallazgo.

La sola lectura de las primeras veinticuatro fojas del cuaderno de pruebas, ministra motivos sobrados para comprender la malicia con que por parte de Riquelme se ha obrado, y engendra la convicción de

que poco ó nada espera de su derecho quien recurre á tan reprobados medios.

Difícil era defender tan mala causa como la presente y esto aunque no excusa, explica en cierto modo la conducta del defensor de ausentes en el alegato que ha presentado. Todo lo expuesto precedentemente, sería mas que sobrado para refutar aquel escrito; pero no quiero dejar pasar desapercibidos errores muy graves que contiene, y que seguramente apocia como razones legales, el autor del alegato.

Lo primero en que insiste demasiado, es en la nulidad del testamento, fundándose en leyes que no lo prueban, y en la razón de que las monjas en general no tenían la libertad necesaria para disponer libremente de sus bienes.

En apoyo de ese concepto cita un trozo de novela—rasgo que no ha tenido precedentes en el foro, y es de descarse que no tenga imitadores; y dá por nulo el testamento, reduciendo la sucesión á un intestado vulgar y ordinario.

Si hubiera tenido presente el defensor, que las monjas antes de profesar, tenían legalmente facultad de disponer de sus bienes: que á mediados del siglo pasado como en la época presente, los parientes colaterales no son herederos forzosos; y por último, el conocido aforismo de derecho «Voluntas coacta voluntas est:» si hubiera tenido presente esto digo, no hubiera pensado en asentar, apoyándose en frases de novela, principios tan contrarios al sentido común y á la ley.

También se dice en el alegato, que han probado Riquelme y Monterde el parentesco que tienen con sor Blasina, desentendiéndose de la inmoralidad criminal de las pruebas del primero y la insuficiencia de las del segundo; y concluye asegurando, que son parientes dentro del cuarto grado. Es cosa tan fácil la computación de grados, que el mas torpe escribiente del registro civil, vería en el caso presente que la familia Riquelme está en quinto grado de parentesco

con la monja sor Blasina y en sexto la Monterde. Si pues, se ha dicho otra cosa por error, es un error inexcusable; y si á sabiendas se ha hecho tan torpemente la computación, se ha tenido en muy pobre concepto al Tribunal, imaginándose que podría sorprendérsele con tan grosera superchería.

Lo mismo digo de las leyes que se citan en el otro sí del alegato, tan absolutamente inaplicables al caso y extrañas á la cuestión, que ofendería la ilustración del Tribunal, deteniéndome en hacer la refutación de aquellos conceptos. Lo que ciertamente llama la atención es, que con tanta ligereza se cite una ley que habla de testamento «no raído ni cancelado,» cuando se trata de hacer valer derechos fundados precisamente en la utilidad de un testamento y que se habla de «familias crecidas» refiriéndose á bienes nacionalizados. Ya se ve; esto solo bastaría para apreciar en su justo valor aquella parte del alegato, en que pide con insistencia, que la Hacienda pública sea condenada en costas.

Por lo expuesto, el Promotor fiscal concluye repitiendo la petición que tiene ya hecha, por creerla bien fundada en justicia.

Zaragoza, Marzo diez y seis de mil ochocientos setenta. — [Firmado]. — *Eugenio Sanchez.*

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Puebla de Zaragoza, siete de Setiembre de mil ochocientos setenta..

Vistos: la alzada interpuesta por los CC. Agapito Fernandez en representación de las Sras. Monterde y Rafael Riquelme, por sí y en representación de sus parientes, en las gestiones que ambos hicieron, deduciendo acción á los bienes yacentes quedados por el fallecimiento de la ex-religiosa que fué del convento de Santa Clara de esta ciudad, sor Blasina de San Antonio; el escrito de expresión de agravios y el de contesta-

cion á ellos; las pruebas aducidas por ambas partes; los alegatos de una y otra, así como del C. Promotor fiscal y cuanto convino tener á la vista. Considerando: que no basta la capacidad legal para suceder en los bienes de álguien tratándose de un testamento, sino que hay que plegarse á las expresas prevenciones del testador, siempre que ellas no pugnen con los terminantes preceptos del derecho positivo en materia de testamentifaccion, que si bien en las líneas ascendente y descendente, no es posible excluir ni en un elogio ó última voluntad que se haga ni ab-intestato á los comprendidos en aquellas; no sucede lo mismo respecto de los colaterales, pues que el que dispone de sus bienes no teniendo herederos forzosos, le es lícito instituir á extraños con preferencia á aquellos últimos: que es un principio generalmente reconocido por las leyes y los mas célebres maestros de jurisprudencia, la posibilidad en que todo testador está para imponer condiciones lícitas y honestas á los herederos voluntarios que se instituyan: que si en la actualidad las leyes novísimas pátrias, conocidas con el nombre de Reforma, suprimieron las instituciones monásticas de ambos sexos, no pasaba lo mismo en el siglo en que la ex-religiosa sor Blasina ordenó su última voluntad, por cuanto en aquella época, muerta como se consideraba para el mundo, estuvo en la órbita de sus facultades el disponer de sus haberes paterno y materno, antes de su ingreso al monasterio: que no teniendo como no tenía la ex-religiosa difunta, herederos forzosos, evidentemente fué libre para instituir á sus parientes en la línea transversal, y con las condiciones posibles y honestas en aquella vez, cuales eran las del mongío en las señoras y las del sacerdocio en los hombres, cuya posibilidad respecto de este extremo, aun en el día permanece: que es tambien un principio legal suficientemente conocido, que cuando un acto pende de una condicion, si ella no se cumple, no debe tener efecto el acto mismo

ó el condicionado: que ni los Sres. Riquelme por su parte cumplieron la del órden eclesiástico que se les impuso ni las Sras. Monterde por la suya ingresaron á alguna de las Órdenes religiosas en el lapso de tiempo considerable que trascurriera de la muerte de sor Blasina; precisa condicion impuesta por ella á sus parientes, para que la sucedieran en los bienes que formaron el caudal mortuario de aquella: que en el período que precedió á la completa transformacion social de la República, es evidente que la R. M. abadesa del ex-convento de Santa Clara, electa patrona de las obras pías y aun de los beneficios que constan en el testamento de sor Blasina, hecho en el mes de Diciembre de 1728, en f.º del escribano público D. Diego de Neira, (fojas 11 y siguientes del cuaderno marcado con el número 1207), dió aplicacion de los bienes que constituian el caudal de su correligiosa á las obras pías subsidiarias de los beneficios ó legados mismos por falta del cumplimiento de las condiciones impuestas á los beneficiados ó legatarios: que atento el riguroso y literal contesto del elogio mencionado, y muchas de las diligencias que se practicaron en el provisorato de este obispado, por los años de 34 y 35; nunca fué la mente de la testadora el instituir puramente á sus deudos mas ó menos próximos en grado de parentesco, sino aun á extraños, siempre que sus parientes no se ordenaran los unos, ó ingresaran á las Órdenes religiosas las otras: que aun al través de la multitud de diligencias desahogadas en esta superior instancia, á mocion de los interesados, no se subsanaron los graves defectos que se advirtieron en la primera, respecto del entroncamiento, hasta el extremo de haberse hecho sospechoso el que tan defectuosa prueba adujo: que no es de menospreciarse en la cuestion que se ha debatido entre el Fisco y los litigantes ya mencionados, la ley 6ª, tít. 10, lib. 11 de la N. R.; pues que defectuosa como fué la prueba testimonial aducida en la primera ins-

tancia, se insistió en aducir otra igual sobre este mismo punto en esta ulterior: que si por intestado es inconcusa la categoría que los colaterales tienen para heredar dentro del grado legal establecido por el derecho; no es lo mismo respecto de las sucesiones testamentarias: que no habiéndose declarado inoficioso el testamento de la ex-religiosa ya citada, y atento el sentido del axioma: "Distingue tempora et concordabis jura;" es evidente que en el juicio cronológico y legal, el de la ex-religiosa, surtió sus efectos respecto de las obras pías, supuesta la omisión de las condiciones por los beneficiados: que el punto que se ha debatido ante los Tribunales federales, en contraste con la Hacienda pública, no es de intestado sino sobre preferencia de derechos á los bienes que constituyeron el caudal mortuario de la ex-religiosa: que bajo el aspecto preciso que tienen los bienes patrimoniales de sor Blasina desde el año de 1859 en adelante, que es el de verdaderas obras pías; sería un absurdo atentatorio contra las leyes de Reforma, el desentenderse del dominio y propiedad, que sus expresas prevenciones atribuyen á la Nación. Por tales fundamentos y todo lo demás que en hecho y en derecho debió tenerse presente y ver convino; este Superior Tribunal, apoyado en las leyes de 12 y 13 de Julio de 1859, y su reglamento de 5 de Febrero de 1861, debía de declarar, y en efecto declara en grado de apelación, confirmada en todas sus partes la sentencia que el C. Juez de Distrito pronunció el 20 de Diciembre de 1861; debiendo lastar las costas particulares, cada uno de los litigantes las suyas y respecto de este Tribunal; pues que las últimas disposiciones del Supremo Gobierno previenen se remita copia de la tasación por conducto de la Jefatura de Hacienda al Ministerio respectivo; á esto fin se pasarán los autos al C. Lic. Juan Herrero, á quien se nombra tasador, y el que regulará las que pertenecen á este mismo Tribunal; cuidando el actuario de remitir la

copia respectiva á la Jefatura, en la que se certificará la recusación que se hizo al magistrado propietario para los efectos ya dichos. Hágase saber á las partes, y sea que apelen ó se conformen, dése cuenta para proveer.

El C. primer magistrado suplente del Tribunal de Circuito, así lo mandó y firmó por esta sentencia definitiva, ante mí. Doy fé.—(Firmados).—*José M. Cantá.*—*Francisco de P. Fuente.*

Pedimento del C. Procurador General de Nación.

El Procurador General de la Nación dice: que en el Juzgado de Distrito del Estado de Puebla, siguieron autos D. Manuel Riquelme, su familia y las Sras. Monterde, contra el Erario federal, sobre preferencia de derechos á los bienes que á su muerte dejó la religiosa Sor Blasina de San Antonio.

Sustanciada la 1.^a instancia, el Juez falló en definitiva: que los actores no tenían la preferencia de derechos que pretendían; que los bienes dejados por Sor Blasina habían sido bien aplicados á obras pías; y que en consecuencia, el Erario federal debió ocuparlos en virtud de la ley de nacionalización. Los actores apelaron de esta sentencia, y admitido el recurso, el Tribunal de Circuito de Puebla conoció en segunda instancia, concluyendo por confirmar en todas sus partes la sentencia de la primera.

Suplicaron los actores; y habiéndoseles negado el recurso, pidieron el certificado que la ley previene; y ahora vienen á agitar el de denegada súplica.

El fundamento alegado en el acto de interponer la súplica, es contra los productores; por que la ley de 4 de Mayo de 1857 dispone exactamente lo contrario de lo que ellos solicitan. Despues lo han reformado pretendiendo que se esté á lo man-

dato por el artículo 32 de la ley de 14 de Febrero de 1826, y por los 136 y 137 de la de 23 de Mayo de 1837. En éstas citas no han sido mas felices que en la primera. Las leyes de procedimientos vigentes son, en el orden federal, la de 14 de Febrero de 1826 y en el orden comun la de 4 de Mayo de 1837.

Los artículos que se citan de la ley de 23 de Mayo de 1837 no están vigentes; por que son contrarios á las dos leyes anteriores. El 32 de la ley de 14 de Febrero de 1826 dice lo contrario de lo que pretenden los suplicantes, pues en su parte final manda expresamente "ésta (la ejecutoria) se causará tambien, aunque la cantidad que se litigue pase de dos mil pesos, siempre que la segunda sentencia sea conforme de toda conformidad con la primera" Por consiguiente, tanto la súplica como el recurso de denegada son contrarios á derecho: y el segundo debe ser desechado, como lo fué la primera.

El Procurador General tiene el penoso deber de llamar la atencion de la Sala, sobre que el escrito ante ella presentado, está suscrito por el mismo abogado que firmó el de Francisco de Paula Pastor en el juicio de amparo que ha seguido contra el Ejecutivo de la Union. Cuando dos veces consecutivas ha pedido contra leyes espresas; deber del que suscribe es pedir y de la Sala mandar, que por lo menos se le haga un serio estrañamiento; y que al desechar el recurso, se haga expresa condenacion de costas, así le pide por conclusion. —México, Diciembre siete de mil ochocientos setenta. —Leon Guzman.

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Junio dos de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el recurso de súplica denegada interpuesto por el C. Lic. Gerardo Marquez, representante de las familias Monterde y Riquelme, como defensor de los ausentes, en los autos seguidos sobre derecho á los bienes de Sor Blasina de San Antonio religiosa que fué en el ex-convento de Santa Clara en Puebla de Zaragoza, cuyo recurso se interpuso del auto pronunciado el 17 de Setiembre de 1870 por el Tribunal de Circuito de Puebla de Zaragoza, que declaró insuplicable la sentencia por el mismo, el dia siete del propio mes y año: el certificado expedido el 3 de Octubre del referido año de 1870: la mejora del recurso interpuesto ante esta Sala hasta el 14 del propio mes y año por D. Manuel Riquelme patrocinado por el C. Lic. Manuel Inda: las constancias de los autos, que fueron remitidas en virtud de haberse mandado hacer la remision por haberla solicitado Riquelme: lo pedido por el C. Procurador general: oída la manifestacion del C. Lic. Manuel Inda, al tiempo de la vista, relativa á renunciar el informe, y visto todo lo demás que convino; Considerando: que la sentencia pronunciada en lo principal por el Tribunal de Circuito de Puebla, es conforme de toda conformidad con la pronunciada por el Juez de Distrito del mismo Estado, y que con arreglo al artículo 32 de la ley de 14 de Febrero de 1826 la sentencia de 2ª instancia que es conforme de toda conformidad con la de primera, causa ejecutoria. Considerando: además, respecto de las otras personas que no se han presentado á proseguir el recurso que el tiempo trascurrido entre la interposicion de él, la expedicion del certificado y la mejora y prosecucion de aquel basta para darlo por insubsistente, puesto que han trascurrido los términos con exceso, designados por la ley de 20 de Marzo de 1840, para recursos como el de que se trata, y esa omision debe ceder en perjuicio de ellas; de conformidad en lo principal con lo pedido por el C. Procurador general de la Nacion se declara:

Primero: que se confirma el auto pronunciado el 17 de Setiembre de 1870, por el Tribunal de Circuito de Puebla de Zaragoza que declara insuplicable la sentencia pronunciada en segunda instancia el día 7 del propio mes y año.

Segundo: No hay condenacion de costas.

Tercero: Devuélvanse las actuaciones al Tribunal de Circuito de que proceden con copia certificada de este auto para los efectos consiguientes; hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo mandaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron. (firmados).—*S. Terdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Anza.*—*Luis M. Aguilar.*—Secretario.

Es copia. México, Junio doce de mil ochocientos setenta y uno.—*Alejo Gomez Elguarte*, oficial 2º y archivero.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por Tibureio Dovali á nombre de su hermano Plutarco, contra el acto del Juez de 1ª instancia de Sombrerete que redujo á éste á prision el 27 de Marzo último, por sospechas de que sea cómplice en el robo verificado el día 23 del mismo en la casa de la Sra. Dª María de la Luz Rivas y Bracho.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR
FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal alegando para definitiva en el juicio de amparo por violacion de

garantías, promovido por el C. Tibureio Dovali en nombre de su hermano Plutarco, dice: que no habiendo informado sobre lo principal de la queja, el Juez de 1ª instancia de Sombrerete, como inmediato responsable de los hechos reclamados, con notorio desprecio del artículo 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, ni remitido las constancias que se le pidieron por conducto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en virtud del auto de 26 de Abril, infringiendo notoriamente en el caso, la disposicion del artículo 12 de la citada ley, los hechos de que se ha quejado el C. Tibureio Dovali, solo pueden ser estimados por la constancia que obra á fojas 9 de estos autos y la que como ha dicho el que suscribe en su respuesta al auto de 3 del corriente, corrobora los hechos en que se ha fundado el recurso.

De la certificacion referida extendida en 30 de Abril último por el C. Nazario Lomas, Juez de 1ª instancia en turno de Sombrerete, aparece que comenzada á instruir una causa en averiguacion del robo de la casa de Dª María de la Luz Rivas de Bracho acaecido la noche del 23 de Marzo, en ella solo aparecian sentadas el día 3 de Abril las primeras diligencias del sumario: en puntos las preparatorias de los acusados entre quienes se cuenta Plutarco Dovali, y ninguna constancia de que se hubiera decretado su prision, no obstante que en poder del alcaide de la carcel, obraba la copia respectiva; añadiendo que ninguna de las diligencias expresadas, está autorizada por el Juez que lo precedió: estos hechos que están administrados con el contenido del oficio original de la Gaceta Política de Sombrerete, remitido por el Supremo Gobierno en virtud del auto de 26 de Abril.

Si pues como aparece de la queja, y no está contradicho por el Juez responsable, Plutarco Dovali, estuvo á su disposicion como indiciado de robo desde el día 24 de Marzo; si hasta el 28 se le recibió su declaracion preparatoria acerca del hecho ma-